



El reconocimiento facial es uno de los campos en que se emplea la inteligencia artificial. Su uso en espacios abiertos implica ciertos riesgos éticos y de privacidad.

Confecionada por un panel de expertos y una amplia participación ciudadana:

Chile da a conocer su primera Política de Inteligencia Artificial que regirá 10 años

Plantea lineamientos para que el país desarrolle una industria en esta tecnología y que esta penetre en los distintos aspectos de la vida. Además, se hace cargo de los aspectos éticos y legales.

ALEXIS IBARRA O.

La inteligencia artificial está en todas partes. En la aplicación que sugiere la ruta más rápida para llegar a destino, en los sistemas bancarios que analizan las transacciones, en el diagnóstico avanzado de enfermedades y hasta en el reconocimiento facial que desbloquea el teléfono.

De ahí que sea importante para un país pensar y definir los lineamientos del desarrollo de la inteligencia artificial (IA). En ese contexto, hoy las autoridades de Gobierno presentan públicamente la Política Nacional de Inteligencia Artificial, documento confeccionado en medio de la pandemia por un panel de expertos y una amplia participación ciudadana, que incluyó 70 mesas autoconvocadas en las que participaron 1.300 personas, como también una consulta pública del borrador del documento.

Ya hay 26 países que cuentan con una política o estrategia de IA en el mundo y, en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia la tienen. "La discusión ha estado liderada por el hemisferio norte y falta la visión del sur, que incorpore nuestra idiosincrasia y nuestra propia cultura", dice el ministro de Ciencia, Andrés Couve.

El trabajo en la confección de esta política—agrega Couve—nace tras una solicitud presidencial en

agosto de 2019. "Nos propuso generar una política nacional que fuera participativa, que considere a la academia, al sector privado y las regiones".

El objetivo de esta política, según consta en el documento, es "insertar a Chile en la vanguardia y colaboración global relacionada con la IA, con un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en IA que cree nuevas capacidades en los sectores productivos, académicos y estatales". Además, dice el texto, que la IA contribuya al desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de los chilenos.

Tres ejes

La política plantea 185 iniciativas agrupadas en tres ejes fundamentales. "Algunas son recomendaciones y otras acciones que ya están en curso, como, por ejemplo, pedir que se acelere la Ley de Protección de Datos y definir que una agencia especializada sea la fiscalizadora", añade el ministro.

El primero de estos ejes es el de los factores habilitantes, es decir, todo lo necesario para desarrollar la IA en Chile, desde la formación de profesionales, la disponibilidad de datos hasta la infraestructura necesaria.

"Lo que se hizo fue ordenar las capacidades que tiene el Estado para fomentar la creación de elementos indispensables para que exista la IA. Si no tenemos conecti-

vidad, ni infraestructura para almacenamiento de datos y si no tenemos datos, no va a ocurrir la IA", dice Aisén Etcheverry, directora de la Agencia Nacional de Investigación (ANID).

En ese sentido, una de las preocupaciones es la formación de capital humano. "En Chile se necesitan 65 mil personas que se dediquen a la IA. Son personas con competencia en ciencias de datos e informática, pero también de otras disciplinas. Un dato interesante es que en las becas que entregamos enfocadas en IA, la mitad de las personas no iban a planes de ingeniería, sino de derecho, diseño, comunicación, y esto es porque la IA ya es transversal", agrega Etcheverry.

En ese sentido, añade el ministro



“Este trabajo no se va poder concretar si no se asignan los recursos necesarios y se convierte en una política de Estado y no de gobierno. Debe tener un presupuesto asignado y alguien que lo lidere, que puede ser un ministro o, mejor aún, el propio Presidente”.

JUAN VELÁSQUEZ
MIEMBRO DEL PANEL DE EXPERTOS



“La inteligencia artificial va a tomar decisiones y estas tienen que basarse y reflejar los valores y la idiosincrasia del país”.

ANDRÉS COUVE
MINISTRO DE CIENCIA

tro Couve, la ciudadanía percibe que entre los mayores riesgos de la IA está el desplazamiento laboral. "Por eso tenemos que tomar acciones concretas como coordinarnos con el Ministerio del Trabajo, el de Economía y la Corfo para impulsar cursos de capacitación, de desarrollo de emprendimientos y crear instrumentos que certifiquen habilidades en IA".

Y si bien en Chile se han hecho avances y existen centros de datos internacionales, también se requiere mejorar la conectividad e incorporar las capacidades de las nuevas redes 5G, dice la directora de ANID.

Añade que la política propone avanzar en la creación de una mesa de datos de interés público que genere mecanismos para que las instituciones puedan poner a disposición los datos, que son el insumo principal de la IA.

El segundo eje de la política es el de "Desarrollo y adopción", el que incluye el desarrollo de la investi-

gación básica y aplicada, la transferencia tecnológica, innovación, emprendimiento, el mejoramiento de servicios públicos, entre otros.

"En el mundo estamos viendo cómo la IA tiene un impacto positivo sobre todo en el producto interno bruto (PIB). En 2050 gran parte del PIB de los países dependerá de su desarrollo en IA", dice Juan Velásquez, académico de la U. de Chile, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y miembro del panel de expertos.

En ese sentido, agrega, países como China y Estados Unidos lideran ampliamente este campo con inversiones millonarias, mientras que Europa va más atrás.

"Tenemos que definir en qué posición queremos que esté Chile. Si queremos comprar la tecnología como cajas negras o queremos seguir dependiendo de la broca para sacar minerales, o bien, Chile puede subirse al carro de la IA y aún está a tiempo. Tenemos profes-

sionales de alto nivel y nichos como la astronomía y los laboratorios naturales, en los que podemos aportar", dice Velásquez.

Privacidad

Finalmente, la política tiene como tercer eje la ética, los aspectos normativos y los efectos socioeconómicos que conlleva la adopción de la IA. Entre otros aspectos, se aborda la protección al consumidor, la privacidad y la ciberseguridad, como también los problemas de sesgos, como el de género, y los impactos sociales.

"Si bien tenemos una ley de protección de datos, esta se ha quedado corta con el avance de la tecnología", dice Velásquez.

Y ejemplifica: "En el futuro (con IA) se podrán hacer medicinas personalizadas, pero para eso necesitan tu ADN, todo tu historial médico y conocer todos tus movimientos para saber a qué agentes contaminantes te expones. Si una isapre sabe que tienes predisposición a ser diabético, ¿lo va a tomar como preexistencia?, ¿te asegurará? Todo eso tiene que estar reglado. Con los datos también se pueden hacer cosas muy feas".

El ministro Couve añade: "Abordamos los riesgos de la interacción humano-máquina y cómo se podría evitar los sesgos en los algoritmos, además planteamos que estos sean transparentes y se pueda explicar su toma de decisiones".

La Política Nacional de Inteligencia Artificial fue pensada para un umbral de 10 años. Hoy estará disponible para descarga desde el sitio www.minciencia.gob.cl.

Linaje AY.4.2: La OMS ya vigila nueva derivación de la variante Delta

Desde julio se ha observado un aumento de casos de esta mutación.

La OMS anunció ayer que está vigilando el linaje AY.4.2 de la variante Delta, cada vez más presente en los contagios de covid-19. "Se observa desde julio un aumento de la transmisión de la secuencia AY.4.2", aseguró.

El linaje (también conocido como Delta plus) comporta tres mutaciones adicionales respecto a la variante Delta original, dos de las cuales están en la proteína spike, la parte del virus que se pega a las células humanas.

Secuencias AY.4.2 fueron descargadas en la base de datos mundial GISAID desde 43 países. Un 93% procedía de Reino Unido, donde este linaje representaba 5,9% de todos los casos de Delta registrados durante la semana del 3 de octubre.

"Se están llevando a cabo estudios epidemiológicos y en laboratorio" para establecer si es más contagiosa o reduce los anticuerpos, según la OMS.

El molnupiravir es un antiviral oral que se toma al comienzo de la enfermedad:

Merck permite que otras farmacéuticas hagan un genérico de su píldora anticovid

El acuerdo contribuirá a dar un amplio acceso al comprimido en 105 países de ingresos bajos o medios.

AFP Y AP

La farmacéutica estadounidense Merck aceptó que otros fabricantes de medicamentos en el mundo produzcan su píldora contra el covid-19, con la intención de ayudar a millones de personas en los países más pobres, informó el miércoles una organización de salud pública respaldada por la ONU.

El organismo Medicines Patent Pool (MPP, que negocia las licencias de tratamientos con los titulares de la patente) dijo en un comunicado que firmó un acuerdo voluntario de licencia con Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics para facilitar el acceso mundial a un precio accesible del molnupiravir, el medicamento antiviral oral experimental contra el covid-19 desarrollado por el gigante estadounidense.

Bajo reserva de la aprobación por parte de los reguladores, el acuerdo contribuirá a dar un amplio acceso al molnupiravir



Una píldora para reducir los síntomas y acelerar la recuperación podría aliviar la carga en los hospitales y ayudar a contener los brotes en países más pobres, con sistemas de atención médica deficientes. También podría impulsar una estrategia doble: tratamiento, con el medicamento, y prevención, principalmente con las vacunas.

en 105 países de ingresos bajos o medios.

Los reguladores de medicamentos de Estados Unidos y la Unión Europea ya están evaluando el tratamiento.

Los antivirales como el molnupiravir actúan reduciendo la capacidad de un virus a multiplicarse, frenando así la enfermedad.

El tratamiento, administrado

a los pacientes a los pocos días de dar positivo, reduce a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte, según un ensayo clínico realizado por Merck, conocido como MSD fuera de Es-

tados Unidos.

En el marco del pacto, Merck acuerda una licencia a MPP, que puede dar luego sublicencias a los fabricantes de medicamentos genéricos.

El acuerdo significa que los laboratorios que desarrollen el medicamento no recibirán derechos por sus ventas mientras el covid-19 esté considerado como una emergencia de salud pública internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Charles Gore, director ejecutivo de MPP, dijo que los primeros resultados del molnupiravir eran "convincientes" y que esperaba que el primer acuerdo de licencia voluntario para un tratamiento para el covid-19 abra paso a otros.

A pesar de las reiteradas peticiones de gobiernos y funcionarios de salud, ningún productor de vacuna ha aceptado algo similar.